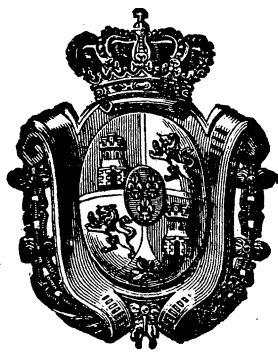


SALE TODOS LOS DIAS.

Se suscribe en Madrid en el despacho de la Imprenta Nacional, y en las provincias en todas las Administraciones de Correos.

Puntos de suscripcion en Madrid.

Por un año.....	160 rs.
Por medio año.....	150
Por tres meses.....	65
Por un mes.....	22



PRECIOS DE SUSCRICION.

<i>En las provincias.</i>	
Por un año.....	360 rs.
Por medio año.....	180
Por tres meses.....	90
<i>En Canarias y Baleares.</i>	
Por un año.....	400
Por medio año.....	200
Por tres meses.....	100
<i>En Indias.</i>	
Por un año.....	440
Por medio año.....	220
Por tres meses.....	110

GACETA DE MADRID.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

La Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real familia continúan en esta corte sin novedad en su interesante salud.

MINISTERIO DE HACIENDA.

A LAS CORTES.

Al encargarse el actual Gabinete de la dirección de los negocios públicos, hubo de fijar ante todo su consideración en los presupuestos generales del Estado correspondientes al presente año, que pendían de la aprobación de las Cortes.

Presentados estos por la administración anterior, de que fueron obra, debía encontrarse seguramente perplejo en la resolución que convenia adoptar: dudó si seria mas oportuno retirarlos desde luego para volverlos á someter á la deliberación de los cuerpos colegisladores, despues de rectificados con arreglo á sus ideas, ó bien limitarse simplemente á proponer aquellas reformas y modificaciones que estimase oportunas. Reconociendo que el primer partido era el mas natural, el mas lógico y el que dejaba mas expedita su acción y mas desembarazada su responsabilidad, juzgaba sin embargo muy conveniente no interrumpir los trabajos parlamentarios con la dilación y tardanza que un nuevo y radical arreglo de los presupuestos habia de ocasionar. Estando ya muy avanzada la legislatura, urgía aprovechar el tiempo de su duración, y darse prisa á realizar las mejoras económicas ansiadas por los pueblos. En fuerza de esta consideración, consultando las verdaderas exigencias del servicio público, y queriendo conciliarlo todo, ha venido por último el Gobierno á decidirse, tras no pocas dudas y vacilaciones, por retirar los proyectos de ley presentados durante el último Ministerio para proveer al presupuesto de ingresos, y conservar el presupuesto de gastos segun habia sido establecido y propuesto. Aunque decidido á conformarse con las bases y fundamentos esenciales de ambos, los alivios y reducciones que pensó desde un principio introducir en el primero hacian indispensables cambios y alteraciones en varios de los impuestos actuales, así como en los productos respectivamente calculados para ellos, y obligaban por lo tanto á sustituirle con otro diferente; mientras que el medio mas sencillo y directo de reformar el segundo era reservar su examen para cuando llegara á discutirse en el seno de la comision del Congreso, y el Gobierno acordase con ella las modificaciones y economías compatibles con la conveniencia del Estado y el interés de la administración. Quedan pues retirados los proyectos de ley presentados á las Cortes en 8 del presente mes relativos al presupuesto de ingresos.

Prévia la autorización de S. M., el Gobierno va á dar cuenta de las ideas que ha tenido presentes al formar el nuevo en los términos que tiene el honor de someter á la aprobación de las Cortes.

Previendo el art. 75 de la Constitución que se presenten todos los años el presupuesto general de los gastos del Estado para el año siguiente, y el plan de las contribuciones y medios para llenarlos, es evidente que los efectos de la ley de 25 de Mayo último, que estableció los de 1845, no pueden extenderse hasta el presente; y no entrando en las miras del Gobierno mantener un orden de cosas tan contrario al texto explicito del código fundamental, ha debido pensar primeramente en legalizarle y ponerse en el terreno de los legítimos y saludables principios del sistema constitucional. Para conseguirlo ha extendido el proyecto de ley designado con el núm. 1º, que le autoriza para continuar cobrando las contribuciones públicas, invirtiendo sus productos hasta una época determinada con arreglo á la ley de Mayo referida, si bien proponiendo la reducción inmediata del importe de la contribucion inmueble en la proporción de 50 millones anuales.

Estos mismos 50 millones son los que el Gobierno propone tambien se rebajen á la cuota de dicha contribucion en el nuevo presupuesto de ingresos, conforme en este punto con las ideas de su antecesor. Cuando lo que mas le preocupa es mejorar la situación de los contribuyentes, y tomar en cuenta sus legítimas reclamaciones, no podia menos de apresurarse á acoger el pensamiento de una reducción que tan de lleno entra en su sistema. Sus intenciones sobre el particular eran hacer todavía una rebaja mucho mas considerable en un impuesto que, por las dificultades inherentes á su asiento y distribución, ha cargado sobre aquellos con notoria desigualdad, y producido en su consecuencia quejas tan justas como numerosas; mas desgraciadamente no le ha sido posible conciliar sus buenos deseos con la imperiosa necesidad de atender cumplidamente á las cargas públicas, y la dificultad de improvisar en estas economías de bastante magnitud para compensar el déficit que por aquella causa resultase.

Luego que estas economías puedan tener lugar sin que se resienta el buen régimen del país, y llegada que sea la ocasión oportuna de hacerlas con el detenimiento y meditación convenientes, entonces no se presentará obstáculo alguno en reducir nuevamente el impuesto en cuestion, sobre todo si el desarrollo natural y espontáneo de otras contribuciones acrecienta, como es fundado esperar, los recursos del Estado, y mejora satisfactoriamente la situación del tesoro. Entretanto el Gobierno confia en que su carga sea mas llevadera con la corrección de los vicios y desigualdades notados en el repartimiento, aprovechando para el nuevo los datos é indicaciones que se hubiesen reunido.

Pero lo que contra toda la voluntad del Gobierno no ha estado en su mano realizar respecto de la contribucion de inmuebles, ha podido verificarse respecto de algunas otras, señaladamente de la de consumos, que no es en verdad la que menos quejas ha suscitado. En el presupuesto del año último se calculó esta contribucion en 180 millones de reales, cantidad verosímilmente elevada en proporción del número de especies imponibles y de los derechos cargados sobre ellas. Por efecto sin duda de este cálculo, y en consecuencia de las disposiciones de la ley de 23 de Mayo, han resultado excesivamente gravados algunos pueblos, y promovido muchas reclamaciones que debían entorpecer en alto grado la marcha de su recaudación. Al fin de mejorar probablemente esta situación, el Ministerio á quien ha sucedido el actual proponia aumentar el número de especies, y recargar las tarifas de algunas de ellas, elevando el producto de la contribucion hasta 200 millones.

El Gobierno ha creído que en interés de los pueblos no debía adoptar tal pensamiento, y en su virtud, no solo se abstiene de proponer aumentos de ninguna clase, sino que limita á 150 millones el importe presupuesto de esta contribucion. Así se promete no incurrir en el abuso de desnaturalizar la esencia y la índole del impuesto de consumos por medidas que propendan á elevar sus productos á una suma á que no pueden razonablemente llegar, y aun desde ahora ha empezado á dictar, dentro del círculo de sus facultades, varias disposiciones propias para calmar las inquietudes de los contribuyentes, alarmados con el carácter que aquel habia tomado en varias partes.

La contribucion de inquilinatos es una de las que han parecido que podia y debía abolirse en beneficio de los pueblos. Establecido este impuesto con los demas que forman parte del nuevo sistema tributario, sus rendimientos no han correspondido á las esperanzas que al principio tal vez se formaran, ni compensan de ningún modo los inconvenientes de su administración. Por otra parte, ora por su novedad en algunas provincias, ora por sus circunstancias, ora por otros motivos, ha tenido y tiene contra ella muchas prevenciones, y originado grandes clamores. En su vista se propone á las Cortes su supresion total y absoluta.

Tambien se ha considerado el Gobierno en el deber de introducir varias modificaciones en la contribucion del derecho de hipotecas. Segun las bases establecidas actualmente, los arriendos y subarriendos de fincas, así rústicas como urbanas, deben satisfacer por razon de este derecho un medio ó un cuarto por 100 anual, segun los casos. Aunque este gravámen no sea realmente excesivo, no hay duda de que por la multiplicidad y frecuencia de los contratos y transacciones de aquel género la propiedad inmueble tiene que resentirse de sus efectos, particularmente con motivo de las trabas impuestas por la necesidad de sujetarlos á un registro individual y minucioso para asegurar la recaudación del impuesto.

Tales entorpecimientos no son conciliables con la libre circulación de la propiedad indicada, que tantas otras causas propenden á paralizar; y como por otro lado el movimiento de las traslaciones del dominio de las fincas ofrece un dato mucho mas exacto y conveniente para formar la estadística territorial que el de los arriendos y subarriendos, único motivo que puede disculpar la imposición y registro de estos últimos, el Gobierno no ha vacilado en suprimir el derecho á que los sujeta la ley de 25 de Mayo, así como la obligación de presentar sus contratos á la toma de razon en las oficinas del ramo. Razones igualmente favorables al movimiento y circulación de la propiedad le han determinado á suprimir el derecho impuesto por dicha ley á las sucesiones y legados de marido á muger y de muger á marido, como igualmente á bajar un 2 por 100 en el de las herencias y sucesiones de bienes inmuebles entre colaterales de tercer grado, y en las de hijos naturales no declarados legalmente: un 3 por 100 en las de colaterales de cuarto grado: un 4 por 100 en las de grados mas distantes en favor de extraños: un 2 por 100 en los legados á favor de parientes dentro del cuarto grado, y un 5 por 100 en los otorgados á parientes en grados mas distantes ó en favor de extraños.

La contribucion del subsidio industrial y de comercio ha producido tantas y tan multiplicadas resistencias, su imposición ha sido motivo ó pretexto de acontecimientos tan deplorables, que era imposible dejar de fijar en ella la consideración, á fin de remediar los defectos é imperfecciones que se le han atribuido. Examinado maduramente este asunto, se reconoce que la razon fundamental de los agravios de que se quejan los contribuyentes consiste en la desigualdad con que las tarifas gravan á los sujetos á ellas, imponiendo la misma cuota fija á todos los individuos

de una misma clase, no obstante las desproporciones naturales entre las respectivas fortunas. De semejante sistema han resultado enormes diferencias en las cargas de los contribuyentes, quedando unos abrumados bajo el peso del impuesto, y sintiendo apenas otros su influencia. Se ha tenido pues que hacer desaparecer este vicio radical del subsidio, y solicitar de las Cortes la autorización necesaria para verificar las subdivisiones correspondientes en las clases, á fin de corregir las desigualdades susodichas, de modo que, en vez de aumentar, disminuya el importe total del derecho fijo que con arreglo á lo ahora establecido grava uniformemente á todos los contribuyentes de una de ellas.

Ademas de los descargos que van mencionados se ha creído prudente hacer otro que no afecta de cerca á los contribuyentes, pero que es indispensable si el presupuesto de ingresos ha de ofrecer partidas de real y efectiva exacción. Contando la administración precedente con el aumento que debían recibir los productos de aduanas por la plantificación de los nuevos aranceles, los habia calculado en 20 millones de reales mas que el año anterior. Sin embargo, como la ley del establecimiento de aquellos no está todavía sometida á la deliberación de las Cortes, y aun cuando lo estuviera, y se encontrase discutida y sancionada, no podria empezarse razonablemente á sentir sus buenos efectos hasta tanto que, prevenidos oportunamente el comercio extranjero y nacional, preparasen las demandas y remesas arregladas á los modernos derechos; se hace preciso en su consecuencia renunciar á aquella halagüeña perspectiva y mantener para el presupuesto de 1846 la suma de 120 millones del de 1845.

Y no se crea por esto que el Gobierno deja de abrigar fundadas esperanzas de que así el ramo de aduanas como los de otras contribuciones indirectas y rentas estancadas reciban grande incremento: confia por el contrario, y confia mucho, en que, merced á medidas fuertes y previsoras que está decidido á llevar adelante, tanto para moralizar la administración como para perfeccionar su mecanismo y corregir sus defectos, los productos de todos ellos se presentarán dentro de poco en sensible mejora y prosperidad, si bien ha querido obrar con cautela, no ofreciendo como resultados seguros é infalibles sino los que hubiesen pasado por el crisol de la experiencia.

A 76 millones ascienden las bajas y reducciones que ha parecido conveniente hacer en los ingresos del tesoro comparativamente con el presupuesto sometido recientemente á las Cortes. Claro es que debemos cubrir en alguna forma el vacío que se sentirá en aquellos con este motivo. El Gobierno estima que puede alcanzarse este objeto rebajando los gastos: 1º en 30 millones á que monta el costo del culto parroquial, y cuya atención debe ser objeto de una ley particular sobre la materia, que presentará al proponer los medios de asegurar de una manera decorosa la subsistencia del clero: 2º en 46 millones á que pueden hacerse subir las reducciones que la comision de presupuestos efectúe con su acuerdo, segun se deja indicado. El equilibrio quedará de este modo restablecido, y la nacion sufrirá un gravámen menos pesado.

El Gobierno se encuentra ahora en el caso de ocupar á las Cortes de una cuestion de la mayor gravedad y trascendencia, que ha juzgado conveniente resolver en el proyecto de ley del presupuesto de ingresos. Por el art. 2º del presupuesto general de gastos del Estado se autorizó al Gobierno para proceder al arreglo de la deuda, así exterior como interior, bajo ciertas y determinadas bases. Aunque el texto explicito y literal se refiere evidentemente al Gobierno, cualesquiera que sean las personas que le formen, el Ministerio actual considera sin embargo que por la índole especial de semejante autorización y el carácter de particular confianza de que está revestida, debe la misma entenderse como limitada solo á aquel que le ha precedido. Tal es por otra parte la interpretación que en todo caso le daría su delicadeza, y por cuyo motivo se creeria moralmente obligado á no hacer uso de ella por ningún concepto. Ademas de que la opinión particular del presente Gabinete es que una cuestion de tanto bulto y de tanta trascendencia como el arreglo de la deuda pública necesita indispensablemente ser objeto de una ley particular, discutida solemnemente en el seno del Parlamento, donde tengan representación los intereses de todos los acreedores, donde se hagan oír todas las reclamaciones, y donde en fin puedan determinarse la extensión é importancia de todas las cargas que de sus resultados hayan de imponerse al país. En vista de estos miramientos no ha podido menos de proponer á las Cortes que desde luego quede derogada la autorización de que se trata.

De semejante disposición, inspirada solo por las consideraciones que acababan de oír las Cortes, no se concluya empero que el Gobierno trata de dejar abandonados á su suerte á los acreedores de la nacion, cuya deuda está puesta bajo la salvaguardia de un artículo constitucional. El crédito público, palanca poderosa para llevar á efecto las grandes mejoras materiales de los pueblos, es en su concepto necesario á los Estados que aspiran á alcanzar todas las ventajas de la civilización moderna, y al desarrollo y fomento del mismo están poderosamente obligados á contribuir los Gobiernos encargados de la dirección de sus destinos. Pero el crédito ha menester elementos en que apoyarse, y sin los cuales en vano es lisonjarse de poderlo conseguir, siendo el

